JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., trece de febrero de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110014003 021 2022 01200 01.

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela de 16 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado 21 Civil Municipal de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por AURORA PINZÓN DE ROJAS contra ENEL CODENSA S.A., dentro de la cual se vinculó a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende el accionante el amparo de su derecho fundamental de petición, y solicitó, en consecuencia, se ordene a la accionada dar respuesta de fondo a su solicitud.

1.2. Como fundamento de sus pretensiones manifestó, en síntesis, que desde el mes de agosto de 2022 se ha incrementado el costo del recibo de energía del inmueble en el que habita, al punto que en la actualidad, adeuda la suma de \$1.128.890,00, por lo que ha realizado diferentes reclamaciones a la convocada, a través de la línea telefónica, sin encontrar solución por esos medios.

Por lo tanto, interpuso, de manera electrónica, varios derechos de petición los días 05 de agosto, 17 de septiembre y 14 de octubre de 2022, de los cuales solo le dieron respuesta al segundo de los presentados, respuesta que, en su sentir, no fue de fondo sino corporativa, porque no resolvió su solicitud.

2. EL FALLO IMPUGNADO

Frente al caso concreto, el Juzgado de primera instancia advirtió que la accionada no dio respuesta a la petición de la actora, pues solo se limitó a informar que la solicitud se encontraba en trámite; además, guardó silencio frente a la acción de tutela, lo que conllevó a dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, presumiendo por ciertos los hechos expuestos por la demandante.

Bajo ese panorama, encontró vulnerado el derecho de petición de la tutelante, concediendo el amparo deprecado, y ordenando a la convocada, dar respuesta dentro de los dos días siguientes a la notificación del fallo.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, ENEL CODENSA S.A impugnó el fallo de primera instancia argumentando, en resumen, que la petición presentada por la actora el 05 de agosto de 2022, mediante el cual expuso: *“Solicito cordialmente revisión a la cuenta del asunto o en su defecto al medidor por cuánto el consumo no está acorde al promedio mensual...Aquí habita solo una persona y los electrodomésticos son mínimos...”*, fue contestada el 08 de agosto de ese año, en la que no se accedió al requerimiento, e hizo un recuento de los consumos facturados. Posteriormente, el 14 de octubre de 2022, la actora presentó una nueva inconformidad por la suspensión del servicio de energía, a la que se dio respuesta el 19 de octubre de ese año.

Adicionalmente, que, para resolver las reclamaciones económicas la actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, lo que torna improcedente la tutela, al no existir la evidencia de un perjuicio irremediable.

Por lo tanto, sostuvo que las solicitudes de la accionante han sido contestadas, hecho que omitió mencionar en su escrito de tutela, y que el amparo se torna improcedente, por lo que solicita la revocatoria del fallo primigenio.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2. El presente trámite se inició por la presunta vulneración a los derechos de petición y debido proceso. Frente al primero, se tiene el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompaña con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos

de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al parágrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

4.3. Precisado lo anterior, y volviendo sobre el caso concreto, se tiene que, en efecto, la parte accionante presentó a la accionada los “derechos de petición” cuya protección persigue con esta acción constitucional, de los cuales aseguró, no haber obtenido respuesta.

Frente a esas solicitudes, aun cuando ENEL CODENSA S.A., al momento de impugnar el fallo de primera instancia aseguró haberlas contestado en debida oportunidad, lo cierto es que, no aportó prueba de las respuestas otorgadas, ni acreditación de su envío a la peticionaria. Dicho de otro modo, no probó que las peticiones hubieran sido respondidas, y además, puestas en conocimiento de la interesada en su dirección física o de correo electrónico, por lo que, ante esa orfandad probatoria, resulta claro que su derecho fundamental de petición se encontraba conculcado.

En ese sentido, en línea con lo expuesto por el *a quo*, el resguardo debió ser concedido, pues el panorama que se evidenciaba al momento de proferirse el fallo de primera instancia, era el de mostrarse transgredido el derecho fundamental de petición de la accionante, máxime si se tiene en cuenta que, en su momento, ENEL CONDENSA no dio contestación a la tutela pese a haber sido notificada de ésta, motivo que conllevó a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, teniendo como ciertos los hechos que dieron origen a la presente queja constitucional.

Por último, se precisa que el fallo controvertido no amparó derecho económico alguno a favor de la actora, que derive en la improcedencia de la tutela, pues su estudio y concesión se dio exclusivamente por cuenta de la garantía fundamental de petición, misma que, se reitera, se evidenció conculcada.

Puestas de este modo las cosas, la accionada deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el *a quo*, precisando, no obstante, que de ninguna manera ello implique que la respuesta deba ser necesariamente, favorable a los intereses de la peticionaria, pues de lo que se trata es que el derecho de petición se responda de fondo, de forma clara, entendible y sobre todos los aspectos contenidos en el mismo, al margen de que su resolución no sea favorable a los intereses de la proponente.

5. CONCLUSIÓN

En consecuencia, advirtiendo que no existen razones para revocar la sentencia de tutela impugnada, se confirmará la misma, conforme ha quedado expuesto en esta providencia.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo analizado, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

6.1 Confirmar el fallo de tutela de fecha 16 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado 21 Civil Municipal de esta ciudad, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cf39903780c7f33560f934a55190333e8bb370ddf5afc339be842c5aaa18aebc**

Documento generado en 13/02/2023 07:58:35 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>